

WORKING PAPER NO. 4

ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO DE ABUSOS CORPORATIVOS: LA LITIGACIÓN COMO ESTRATEGIA DE RESISTENCIA Y DE EMPODERAMIENTO A LAS VÍCTIMAS. Parte I

Coordinación

DANIEL IGLESIAS MÁRQUEZ (URV)
ESTRELLA DEL VALLE CALZADA (UV)

Julio - septiembre 2024

Proyecto de investigación: Acceso a la justicia en el contexto de abusos corporativos: la litigación como estrategia de resistencia y de empoderamiento a las víctimas (ACCJUSTEDH) Referencia: ICI023/23/000001 – Institut Català Internacional per la Pau

Acceso a la justicia en el contexto de abusos corporativos: la litigación como estrategia de resistencia y de empoderamiento a las víctimas

Parte I

Coordinación:

Daniel Iglesias Márquez
Universitat Rovira i Virgili

Estrella del Valle Calzada
Universitat de València

Autores y autoras:

Aintzane Márquez Tejón
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) y Universidad
Carlos III de Madrid

Daniel Iglesias Márquez
Universitat Rovira i Virgili

Estrella del Valle Calzada
Universitat de València

Florencia S. Wegher Osci
National University of Litoral

Joan-Marc Ferrando Hernández
Universitat de València

Sebastián Smart
Universidad Anglia Ruskin

Índice

1. **Acceso a la justicia en el contexto de abusos corporativos: la litigación como estrategia de resistencia y empoderamiento de las víctimas**

Daniel Iglesias Márquez y Estrella del Valle Calzada

2. **An intersectional feminist strategy for corporate accountability: using strategic litigation to protect reproductive rights**

Aintzane Márquez Tejón

3. **The Lafarge case and corporate criminal responsibility for financing terrorism**

Joan-Marc Ferrando Hernández

4. **National Contact Points for Responsible Business Conduct: the good, the bad, the ugly**

Florencia S. Wegher Osci

5. **Derechos humanos y empresas: análisis de jurisprudencia en el Sistema Interamericano**

Sebastián Smart

ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO DE ABUSOS CORPORATIVOS: LA LITIGACIÓN COMO ESTRATEGIA DE RESISTENCIA Y DE EMPODERAMIENTO A LAS VÍCTIMAS

Daniel Iglesias Márquez
Universitat Rovira i Virgili

Estrella del Valle Calzada
Universitat de València

Introducción

El litigio en contra de las empresas por los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus actividades o cadenas de suministro es una herramienta clave no solo para la búsqueda de la reparación de las personas afectadas, sino también para la rendición de cuentas y para promover una conducta empresarial que respete los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales. Para lograr estos objetivos que son prioritarios en un contexto de globalización económica, es necesario que las personas afectadas y otras partes interesadas puedan acceder a una amplia gama de mecanismos de reparación. En este sentido, el [Pilar III de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos](#) contempla los tres tipos de mecanismos para ofrecer acceso a una reparación efectiva en casos de impactos negativos sobre los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales: mecanismos judiciales estatales, mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado, y mecanismos de reclamación no estatales.

Los [litigios en contra de las empresas por abusos de derechos humanos](#) no solo han tenido una expansión global, sino también han evolucionado de manera importante desde la década de los ochenta, cuando se interpusieron algunas de las [primeras acciones](#) en contra de empresas transnacionales como *Unocal*, *Shell*, *Rio Tinto*, *Coca Cola* y *Talisman*, basadas en el *Alien Tort Claims Act* de los Estados Unidos. Estos litigios (fallidos en su mayoría) en Estados Unidos, así como en otras jurisdicciones como [Reino Unido](#) y Australia, han sido fundamentales para mapear las injusticias del modelo actual de producción y consumo. Estos casos pusieron en evidencia algunas de las externalidades

negativas de las cadenas de valor de las empresas transnacionales, que tienen efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos en el Sur Global. Estos casos han impulsado y configurado una agenda –internacional– en materia de empresas y derechos humanos que tiene entre sus objetivos cubrir las lagunas de la gobernanza empresarial que permiten que las empresas continúen generando impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Asimismo, estos casos pioneros han sido fundamentales para identificar los numerosos [obstáculos legales y prácticos](#) que enfrentan las personas afectadas por las actividades empresariales en el acceso a la justicia. Los obstáculos que encuentran estas personas son también indicadores de los elevados niveles de impunidad de los que han gozado las empresas en el contexto de la globalización económica.

Indudablemente, estas primeras experiencias de litigio influyeron en la construcción y configuración de los Principios Rectores. Los obstáculos que enfrentan las personas afectadas por las actividades empresariales en el acceso a la justicia proporcionan un fundamento sólido de la relevancia del Pilar III. Este Pilar se centra en eliminar los obstáculos legales y prácticos que podrían dificultar los derechos de las víctimas, en lugar de abordar los diferentes mecanismos que podrían proporcionar acceso a la reparación, incluso en un contexto transnacional. El Principio 26 establece que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para garantizar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales al abordar violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas. En particular, este principio subraya la importancia de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otro tipo que puedan resultar en una denegación de acceso a los mecanismos de reparación.

El litigio como una oportunidad para la reparación y la transformación: avances recientes

Si bien, de manera general, la reducción y eliminación de los obstáculos en el acceso a mecanismos sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de los Estados, no se puede negar que la adopción y la implementación de los Principios Rectores a nivel internacional, regional, nacional y local ha servido para impulsar y generar un nuevo contexto para los litigios en materia de empresas y derechos humanos.

En la era de los Principios Rectores, se ha ampliado la comprensión del impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos y se han logrado avances significativos para abordar estos impactos. En este contexto, el litigio (estratégico) contra las empresas por abusos de derechos humanos ofrece nuevas oportunidades no solo para asegurar una reparación integral para las personas afectadas, sino también para influir en la formulación de leyes y políticas en el ámbito de empresas y derechos humanos. Además, permite definir el alcance de la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos e, incluso, mantener activa la agenda de empresas y derechos humanos en los Estados.

En los últimos años, los Estados y las empresas están dedicando esfuerzos sustanciales a la construcción de un andamiaje, que comprende medidas nacionales e internacionales, tanto obligatorias como voluntarias, con el objetivo de prevenir los abusos de derechos humanos por parte de las corporaciones. Algunos Estados europeos, como [Alemania, Francia o Noruega](#), han adoptado [leyes de diligencia debida obligatoria en derechos humanos](#) con el objetivo de prevenir los impactos negativos de las actividades empresariales y las cadenas de suministro. Sin embargo, incluso en un escenario ideal de prevención, las empresas aún pueden causar o contribuir a causar impactos negativos en los derechos humanos que no eran predecibles ni evitables. A su vez, las personas afectadas pueden continuar enfrentando diversos obstáculos en el acceso a los mecanismos de reparación.

Las leyes adoptadas a nivel nacional han sido insuficientes para reducir o eliminar los obstáculos en el acceso a mecanismos de reparación, ya que la mayoría de las iniciativas regulatorias actuales no han intentado abordar las asimetrías de poder y armas existentes entre las personas afectadas y las empresas. En el caso de Francia, [la Ley del Deber de Vigilancia](#) establece un mecanismo de reparación mediante una acción de responsabilidad civil cuando se haya producido un daño derivado del incumplimiento de las obligaciones de vigilancia. Sin embargo, la ley presenta limitaciones significativas: no especifica la competencia judicial para los casos de daños ocurridos fuera del territorio francés, no clarifica la legitimación activa de las organizaciones de la sociedad civil para interponer demandas, y mantiene la carga de la prueba sobre las

personas demandantes, lo que se ha considerado uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas afectadas en litigios contra empresas. En el caso de la [Ley de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro \(LkSG\)](#) de Alemania, que en parte surge a partir de la experiencia del caso *Jabir and others v. KiK*, se establece claramente que la Ley no genera responsabilidad civil. Sin embargo, la responsabilidad civil que pueda surgir de manera independiente a la LkSG permanece inalterada. Un aspecto positivo es que, desde una perspectiva procedimental, el § 11 de la LkSG prevé que los sindicatos nacionales y las organizaciones no gubernamentales puedan tener legitimación especial para interponer demandas en procedimientos civiles cuando se vean afectados intereses legales de gran relevancia, tal como se define en el § 2, párrafo 1 de la LkSG.

La experiencia acumulada en diversos [litigios contra empresas en diferentes jurisdicciones europeas](#) –junto con las limitaciones y vacíos observados en las leyes nacionales de diligencia debida obligatoria–, como el caso *Jabir and others v. KiK* en Alemania, *Friday Alfred Akpan & Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc & Shell Petroleum Development Company of Nigeria* en los Países Bajos, y *Arica Victims KB v. Boliden Mineral AB* en Suecia, ha influido significativamente en el proceso de elaboración de la [Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad](#). Estas experiencias han logrado que se incluyan en el texto final de la Directiva disposiciones que abordan varios de los obstáculos enfrentados por las personas afectadas por abusos corporativos. En particular, el artículo 29 de la Directiva aborda cuestiones como la duración limitada de los plazos de prescripción, los costes prohibitivos de los procedimientos de responsabilidad civil, las acciones de representación y las dificultades para acceder a las pruebas.

Los litigios contra las corporaciones también están desempeñando un papel crucial en la delimitación e interpretación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Canadá en el caso *Nevsun Resources Ltd. v. Aray* de 2020 refuerza la concepción de que las empresas no solo tienen el deber de respetar los derechos humanos, sino que también pueden ser consideradas responsables ante los tribunales nacionales por violaciones que se producen en los países donde llevan

a cabo sus operaciones. Además, esta decisión establece que las empresas deben cumplir no solo con las normativas locales, sino también integrar las normas de derecho internacional consuetudinario en sus prácticas globales. Entre estas normas se incluyen las prohibiciones contra el trabajo forzado, la esclavitud, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el fallo en el caso [*Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*](#) esclarece la dimensión climática de la responsabilidad corporativa en la protección de los derechos humanos. La sentencia sugiere que dicha responsabilidad conlleva, entre otras obligaciones, el compromiso de las empresas de implementar medidas concretas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en concordancia con los objetivos establecidos en el régimen internacional sobre cambio climático. Este tipo de decisiones judiciales contribuye a ampliar y profundizar el contenido, el alcance y la práctica de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Los litigios internacionales contra Estados por violaciones de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales desempeñan un rol fundamental en la configuración y promoción de una agenda nacional en materia de empresas y derechos humanos. Estos litigios estratégicos no solo visibilizan los abusos cometidos por corporaciones, sino que también destacan la obligación estatal de proteger los derechos humanos frente a las acciones de actores no estatales. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), [diversas experiencias](#), tanto en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como en el [sistema de casos](#), han producido resultados significativos en términos de visibilización de injusticias sociales y ambientales. Estos esfuerzos han impulsado reformas legislativas y políticas públicas, además de contribuir al desarrollo de nuevos estándares en la protección de grupos étnicos, mujeres y cuestiones ambientales.

La CIDH ha sostenido audiencias públicas durante mucho tiempo, centradas en los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos, particularmente en relación con las industrias extractivas. Por su parte, la Corte Interamericana ha abordado una serie de casos emblemáticos, como [*Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil*](#), [*Buzos Miskitos vs. Honduras*](#), [*Vera Rojas vs. Chile*](#), [*Olivera Fuentes vs. Perú*](#) y [*La Oroya vs.*](#)

[Perú](#). Estos casos han consolidado una línea jurisprudencial que define los deberes de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a las actividades empresariales, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y tomando en cuenta el contexto socioeconómico de la región. En consecuencia, estas sentencias impulsan y mantienen el tema de empresas y derechos humanos dentro de la agenda política y regulatoria de los Estados del sistema interamericano.

Potenciales riesgos asociados a la experiencia del litigio

A pesar de las potencialidades del litigio por abusos de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, también conlleva riesgos importantes. En primer lugar, cabe la posibilidad de establecer precedentes legales desfavorables, lo que no solo supondría un resultado negativo para el caso en cuestión, sino que también podría debilitar el marco regulatorio que rige las actividades empresariales, con el consiguiente impacto negativo sobre el comportamiento de las empresas. Un ejemplo de ello es el [caso Vedanta](#), en el que el tribunal sugirió que las empresas matrices podrían ser responsables de las acciones de sus subsidiarias si aquellas están supervisando y controlando sus actividades mediante informes o políticas corporativas. Este precedente podría llevar a que las empresas adoptaran una actitud más cautelosa en cuanto a la divulgación de información relevante.

Por otro lado, existen riesgos adicionales para las partes involucradas en la iniciación del litigio, tales como los titulares de derechos, organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. Estos actores no solo enfrentan el riesgo de ser condenados a cubrir los costos judiciales en caso de que el litigio no prospere, sino que también pueden ser objeto de intimidación, hostigamiento, criminalización, violencia e incluso asesinato. Un fenómeno particularmente problemático en este contexto son las [Strategic Lawsuits Against Public Participation \(SLAPPs\)](#), un tipo de litigio promovido por las empresas con el objetivo de instrumentalizar los riesgos y costos del proceso judicial contra las personas defensoras de derechos humanos con el fin de disuadir la crítica u oposición. Estos casos suelen involucrar a empresas que dirigen sus acciones contra activistas locales que se oponen a determinadas

actividades empresariales o contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público.

AN INTERSECTIONAL FEMINIST STRATEGY FOR CORPORATE ACCOUNTABILITY: USING STRATEGIC LITIGATION TO PROTECT REPRODUCTIVE RIGHTS

Aintzane Márquez Tejón
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) y Universidad Carlos III de Madrid

Strategic litigation has proven to be a potent force for social change, [significantly influencing](#) public and corporate policies and contributing to develop judicial due diligence standards and binding norms. However, there is a crucial gap in addressing the rights of people disadvantaged by the system, such as women, girls and gender-diverse people, within the realm of corporate accountability. For this reason, amongst many others, it is imperative for all stakeholders, including legal professionals, to adopt a [comprehensive approach](#) that fully integrates an [intersectional](#) and [anti-colonial](#) perspective. This approach is necessary to identify, prevent, mitigate and account for corporate misconduct, acknowledging the complex interplay of gender, race, class, and colonial legacies.

This blog underscores the pivotal role of considering the perspectives of vulnerabilised and racialised communities within corporate due diligence frameworks, including corporate accountability strategies. By examining specific cases, it shows the instrumental power of strategic litigation as an advocacy tool for human rights, spotlighting the [gender impact of corporate abuses](#). Additionally, it underlines the importance of integrating lessons and experiences from the Global South into broader strategic litigation learnings, as [other experts](#) have highlighted, enlightening us and fostering a [decolonial approach](#).

The Chilean case: defective contraceptives and reproductive health

A striking example of the gender impact of corporate misconduct is the [case of defective contraceptives](#) in Chile. In 2020, it was revealed that a significant number of contraceptive pills distributed in public health facilities in Chile were faulty, [leading to numerous unplanned pregnancies](#). Women's Link Worldwide and Miles Chile took legal action before UN Special Procedures, accentuating the

state's failure to adequately monitor pharmaceutical quality and the companies' negligence in ensuring product safety.

The case attracted [international attention](#), with multiple [United Nations experts](#) recognising it as an issue of structural discrimination against women. The Chilean government faced pressure to respond, resulting in [a legislative proposal](#) (not passed) to improve regulatory oversight and accountability for pharmaceutical companies. Although some financial compensation was secured through agreements with the manufacturing transnational corporations, the case underscored the need for more robust mechanisms to prevent and address such violations.

In that vein, the Chilean State now faces a [new lawsuit](#) by seven women who experienced unintended pregnancies due to these defective contraceptives in 2020. This lawsuit demands that the State takes responsibility for the economic, emotional, and life project disruptions caused by the unintended and unplanned pregnancies. The lawsuit points out inadequate quality control by the responsible institutions in acquiring the contraceptives and that the professionals responsible for distributing the medications were not sufficiently trained to identify defective batches and prevent their distribution. Moreover, women who consumed the defective contraceptives were not timely and directly informed about the issue to stop using the pills. Besides compensation for the seven complainants, the lawsuit proposes a series of non-repetition measures to prevent such errors. This approach emphasises how strategic litigation goals extend beyond the specific case to have a broader impact on women from most marginalised or impoverished communities.

The Colombian case: glyphosate, conflict and reproductive justice

In Colombia, the case of Yaneth Valderrama also exemplifies an intersectional approach in strategic litigation. Yaneth, a pregnant woman, was exposed to glyphosate, a widely used herbicide, during an aerial fumigation campaign targeting illicit crops. Her subsequent health deterioration and death brought attention to the broader issue of reproductive rights violations linked to corporate and state practices in agricultural sectors.

The case, litigated by the [Center for Reproductive Rights](#) before the Inter-American system, emphasised the intersectional [impacts on women during conflict](#), particularly those in rural and marginalised communities. In 2018, the [IACHR admitted](#) the case, citing the lack of adequate investigation by national authorities and the inappropriate handling of the complaint by military justice, which is not considered suitable for such cases.

In addition, in 2022, due to different NGO's efforts, the Truth Commission in Colombia published a landmark report titled "[My Body is the Truth: Experiences of Women and LGBTIQ+ People in the Armed Conflict](#)," referencing the case of Yaneth. The report not only acknowledges reproductive violence as a distinct form of aggression but also proposes a framework for reparations, emphasising the need to consider intersectionality in transitional justice mechanisms. Moreover, in November 2023, the [IACHR](#) held its first hearing focused on the [impacts of agrochemicals in Latin America](#), particularly on the [reproductive health of women and girls in vulnerable communities](#) in countries like Colombia, Brazil, and Argentina. The hearing emphasized strengthening legal and judicial guarantees to ensure affected individuals can effectively access justice.

The impact of pesticides, particularly glyphosate, has led to significant litigation. Recently, [cases involving Bayer](#) (which acquired Monsanto) have again brought these issues to the forefront. Yaneth Valderrama's case remains one of the most emblematic legal cases, illustrating the role of corporations and the gender-specific repercussions of herbicide use. Interestingly, Bayer also faces multiple legal challenges related to reproductive health devices, which again, of course, has a gender-specific impact in [Spain](#), [The Netherlands](#), and [Australia](#).

The South African case against Anglo American: environmental justice in Kabwe

In South Africa, the litigation against [Anglo American South Africa Ltd \(AASA\)](#) regarding lead contamination in Kabwe, Zambia, demonstrates the potential of strategic litigation to address [historical corporate abuses](#). The [case](#), litigated by South African Attorneys, Mbuyisa Moleele Attorneys, in collaboration with UK-based human rights lawyers Leigh Day, representing approximately 100,000 affected residents, argues that AASA failed in its duty of care by not preventing

lead poisoning from its mining operations. By pursuing legal action in South Africa, the victims can take advantage of the South African class action procedure, a vital mechanism for facilitating their access to justice.

The case brings attention to several important aspects from an intersectional feminist perspective. The legal process involves analysing the different effects of environmental contamination on children and women, especially those who are and who can become pregnant. This approach is crucial for addressing the various forms of discrimination that these groups experience.

Despite [initial judicial setbacks](#), the case also brought significant international attention to the impacts of mining activities on the environment and gender health. The involvement of various [NGOs](#) and [United Nations experts](#) as Amici Curiae, emphasised the importance of corporate adherence to human rights principles, even retroactively.

In December 2023, the High Court in Johannesburg [dismissed the class action certification](#). The Court argued that the class action was unfeasible and could set a problematic precedent, estimating that it could take a decade to organise the claimants. Additionally, the Court highlighted the difficulty of holding a company accountable for actions that occurred half a century ago based on current knowledge and standards. However, on April 19, 2024, the [Court granted permission to appeal](#) the December judgment, stating that there were compelling reasons to grant the appeal due to the evolving class action law in South Africa and the current matters of law that directly implicate constitutional rights. The Kabwe Claimants will now take their case to the Supreme Court of Appeal of South Africa later this year.

Lessons from the Global South and the importance of integrating a gender decolonial perspective into strategic litigation

This blog delves into the connection between sexual and reproductive rights, gender justice, and corporate accountability through strategic legal actions. The challenges related to contraceptives in Chile, the effects of glyphosate on reproductive health in Colombia, and the environmental justice case in Kabwe show the unequal impacts of corporate misconduct on women and other vulnerabilized groups. These cases also underscore the urgent need for a gender

and intersectional approach in corporate due diligence policies and practices, including strategic litigation.

We must also remember that significant barriers to justice, including the complex nature of global corporate structures and [neo-colonial dynamics in international, regional and national laws](#), persist and demand our attention to ensure effective and timely remedies. We need a framework that addresses power imbalances and structural inequalities, focusing on local and regional efforts to establish practical judicial and regulatory standards. By centring the voices and experiences of these groups, we can develop [more inclusive](#) and effective strategies for promoting corporate responsibility and advancing human rights on a global scale.

For all these reasons, it is crucial to work together to prevent, punish, and address corporate abuses from a gender, intersectional, and anti-colonial perspective. Reflecting on the above cases might make us recognise the importance of adopting a holistic and inclusive approach to navigating corporate accountability issues.

THE LAFARGE CASE AND THE CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM

Joan-Marc Ferrando Hernández
Universitat de València

The French cement company Lafarge is being prosecuted before the French courts for several criminal offences in relation to its activities during the Syrian armed conflict. Among other charges, the corporation has been accused of complicity in crimes against humanity and financing terrorism.

There are several interesting legal aspects that must be considered in relation to the Lafarge case and the alleged crimes aforementioned. This blog contribution addresses, in particular, the issue of corporate responsibility arising from the financing of terrorism. To this end, we firstly analyze the background of the criminal proceedings brought against the company in France where the charges are presented. Secondly, we describe the configuration of the crime of financing of terrorism both in international law and in the French Criminal Code. Thirdly, the paper examines the link between the financing of terrorism and the complicity in crimes against humanity according to the decisions of the French courts.

Background: Lafarge activities in Syria and the criminal proceedings in France

There is an ongoing armed conflict in Syria since 2011. A year before, Lafarge had started running a cement factory in Jalabiya, a northeastern town 90km away from Raqqa, the city which became *de facto* capital of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Large swaths of the country fell under the control of different non-state armed groups. Hence, [Lafarge](#) dealt with different armed factions, including ISIS, through its subsidiary named Lafarge Cements Syria (LCS) with the aim of maintaining the company's operations in the area.

At that time, most of the foreign corporations working in Syria had left or stopped their production. Lafarge did not. According to the available information, Lafarge paid money to ISIS in order to ensure the protection and the proper functioning of its Jalabiya factory. [The relationship between LCS and ISIS was kept since](#)

[ISIS took control of the cement plant in September 2014](#). Lafarge was then one of the most relevant cement corporations of the world. [Nowadays, the company remains as one of the most powerful in the cement sector, despite changing its name](#).

In 2016, several human rights organizations ([Sherpa](#) and [ECCHR](#)) along with eleven former Syrian workers filed a lawsuit in France against Lafarge, LCS, and their former CEOs. Lafarge was accused of complicity in the commission of international crimes, financing terrorism, and deliberately endangering workers' lives. The facts under investigation occurred between 2013 and 2014.

Legal scholars have underlined interesting [aspects of the Lafarge case](#) in the field of business and human rights. For instance, the liability of a parent company for the acts of its subsidiary abroad. Likewise, the case plays a role in the development of corporate responsibility in crimes against humanity. Another relevant element is the indictment of a transnational corporation like Lafarge for the financing of terrorism.

Corporate responsibility for the financing of terrorism

The financing of terrorism is criminalized in the [International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism adopted in New York in 1999](#). The offence is also enshrined in the Council of Europe [Convention no.198 on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism](#), adopted in 2005. France has ratified both international treaties.

According to Article 2 of the New York Convention, any person who “by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part” to carry out the listed terrorist acts, is considered to be committing such offence.

Article 5 of the Convention establishes that State Parties undertake to adopt all necessary measures to enable legal entities in their territory or organized under their laws to be held liable when a person responsible for the management or control of that legal entity has, in that capacity, committed the offence set forth in

article 2. Such liability may be criminal, civil or administrative, and without prejudice to the individual criminal responsibility.

The French Criminal Code includes the offence of the [financing of terrorism in article 421-2-2](#). The offence resembles to that enshrined in the New York Convention. According to this provision, it constitutes a terrorist action the financing a terrorist enterprise by providing, collecting or managing funds, securities or property of any kind or by giving advice to that end, with the intention that such funds, values or goods be utilized, or knowing that they are intended to be utilized, in whole or in part, for the commission of any terrorist acts regardless of the actual commission of such act.

Article 121-2 of the French Criminal Code also establishes that legal persons may be held criminally liable for offences committed on their account by their bodies or their representatives. In addition, French nationals, legal or natural, may be prosecuted for the crimes perpetrated abroad following article 113-6.

Lafarge and the financing of terrorism

Lafarge was accused of financing terrorism together with the charge of complicity in crimes against humanity. In 2021, [the French Court of Cassation confirmed the indictment for the crime of financing terrorism](#). In doing so, the court referred to the fact that the investigation and an internal report revealed that Lafarge and its subsidiary had paid 15 million dollars to armed groups, including ISIS. The company irregularly recorded the transactions. The *Cour de Cassation* also found that Lafarge's senior executives agreed upon the payments to ISIS knowing that ISIS was a terrorist group and that there was an armed conflict in Syria.

As a consequence, the French Court of Cassation stated that, in accordance with article 421-2-2 of the Criminal Code, it was sufficient for the facts to be established that the author of the financing knows that the funds provided were intended to be used by the terrorist undertaking to commit a terrorist act, whether or not this act occurred, regardless of whether he or she intended to see the funds used for this purpose.

Two relevant aspects in the Lafarge case may be added. Firstly, the Court of Cassation linked the financing of terrorism with the complicity in crimes against

humanity. The tribunal reasoned that, in the light of the facts, payments to ISIS and the awareness of its criminal activities were sufficient to uphold the charge of complicity in crimes against humanity. Once again in January, 2024, [the highest court confirmed the charge](#). A few days after, the [French National Anti-terrorist Prosecutor's Office](#) (PNAT) requested that Lafarge and nine former executives be tried on charges of financing terrorism. Secondly, [Lafarge was also accused of financing ISIS before the US courts](#). In this case, the company pleaded guilty in 2022 and agreed to pay financial penalties totaling 778 million dollars.

Conclusion

The Lafarge case constitutes a valuable precedent in the fight against impunity for corporate serious violations of human rights. The recognition that a transnational company, as a legal person, may be tried for complicity in the commission of crimes against humanity is a positive step. In this sense, the offence of financing terrorism may help to trail complicity in such international crimes.

This also confirms that corporate activities abroad should be analyzed under the perspective of the prevention terrorist financing, particularly in areas of armed conflict where terrorist organizations operate. In the end, the Lafarge case shows that the debate around corporate criminal responsibility is now more alive than ever before. We should remain vigilant to the resolution of this case.

NATIONAL CONTACT POINTS FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT: THE GOOD, THE BAD, THE UGLY

Florencia S. Wegher Osci
National University of Litoral

Adopted in 1976, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (MNE Guidelines) represent the first comprehensive and government-endorsed framework for responsible business conduct directed at multinational companies. They establish expectations for member countries of the Organization, as well as those adhering to the International Declaration on International Investment and Multinational Enterprises, to ensure its effective implementation in relation to the activities of companies operating in or from their jurisdictions. The unique extraterritorial scope of the MNE Guidelines' makes them especially significant given the barriers to international litigation and the complexities of global supply chains.

To facilitate its implementation, the MNE Guidelines are supported by National Contact Points (NCPs) for Responsible Business Conduct (RBC). Although the NCPs were introduced in the 1984 revision of the MNE Guidelines, it was not until 2000 that they were formally assigned a remedial role, specifically the task of addressing complaints regarding non-compliance with the standards of business conduct outlined in the MNE Guidelines. In its last update, in 2023, the content of the Guidelines was aligned with contemporary standards and regulations on environment and climate change, technology, due diligence, sustainability, and protection of human rights defenders, among other relevant issues, while seeking to reinforce the NCP system as an implementation mechanism.

The NCPs are equipped with a set of promotional and oversight functions and form a system that is interwoven around the common tasks assigned to them, the broad scope of their territorial and personal competence, and the capacity for communication and articulation that arises from their extraterritorial action and their functions within the framework of the Guidelines. This allows them to set themselves up as a real authority to control the activity of the companies insofar as they constitute one key avenue for remediation.

The MNE Guidelines allows specific instances to be filed with the NCPs of the countries where the parent company or its subsidiaries are registered or where they operate. This aspect is of particular interest since it validates an extraterritorial exercise of control of corporate activity, which makes it possible to file a complaint in an NCP of a State other than the one where the abusive activity occurred, even against the parent company. Similarly, it is possible to consider control within the supply chain, indicating violations or non-compliance with respect to companies that are part of the production chain of a particular good or service. The broad mandate of the NCPs has led to their involvement in specific instances across more than 100 jurisdictions, effectively doubling their territorial reach and enhancing the prominence of their role.

Non-judicial mechanisms certainly play an important role in the range of mechanisms contemplated by the UNGPs, with the capacity to contribute to provide for comprehensive reparation of affected rights and strategies to promote prevention of future adverse impacts. In this sense, in the following lines we present some notes that seek to highlight positive and negative characteristics of the functioning of the NCPs.

Limits and capabilities: what to seek, what to expect

In order to design a suitable strategy and set appropriate expectations, it is necessary, as in any other instance of intervention with an impartial third party, to understand the capacities and limits of the chosen mechanism's functions and competencies. In this regard, NCPs present some distinctive signals that are particularly relevant, especially if they are considered as part of a broader architecture of remediation mechanisms in relation to RBC and in the field of business and human rights.

The good

Among the positive aspects, its broad territorial scope stands out as a defining feature. This characteristic differentiates the NCP mechanism from the jurisdictional limits inherent in domestic judicial systems and conventional legal frameworks. Additionally, the NCP mechanism offers several notable advantages, such as its gratuity, flexibility, and a more predictable duration of its

proceedings. These features represent significant benefits when compared to arbitration or court proceedings.

Another key strength of the NCPs lies in their technical expertise and the specialized knowledge of their officers in the field of RBC and due diligence. The construction of a global network of NCPs further enhances the mechanism's ability to elevate international standards. The NCPs' role extends beyond merely facilitating agreements between parties; they can also implement follow-up and monitoring mechanisms, issue determinations in their final statements, and suggest strategies for improving due diligence processes to help prevent future violations of the MNE Guidelines.

The bad

In contrast, agreements reached in the specific instance process are not legally enforceable as they do not constitute court judgements or arbitration awards and are, like the procedure itself, voluntary. Another negative aspect is the disparity between the performance of the different NCPs. This can be observed based on the analysis of different variables, not only of the effective compliance with the functional equivalence criteria, or the statistics concerning the number of agreements reached through the specific instances mechanisms, but also considering the conditions of effectiveness required for the non-judicial state based mechanisms in the context of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, as well as the requirements for handling specific instances included in the Guidelines¹. Certainly, the MNE Guidelines strive to eliminate these inequalities, in particular through the definition of functional equivalence criteria and peer review processes, which became mandatory for NCPs since the Guidelines were updated.

The ugly

Concerning the weaknesses in the performance of NCPs, it is worth highlighting the lack of confidence in the mechanism for providing reparations. Although, there has been some progress, as evidenced in the 2023 State of Remedy report

¹ Particularly relevant in this regard is the work of OECD Watch through their NCP evaluations. See <https://www.oecdwatch.org/indicator/>

produced by OECD Watch and as reflected in the OECD's report on the mechanism's 20th anniversary, the majority of the interventions made by NCPs haven't achieved a positive outcome, considering both the reach of final agreements and other forms of meaningful intervention². Similarly, the absence of a group sensitive approach in the NCPs procedures is a significant shortcoming and an overlooked opportunity especially important if the mechanism is expected to serve as a means to obtain remediation, including through guarantees for non-repetition.

Finally, one key drawback is their largely untapped capacity to advance the RBC agenda. Despite the positive aspects previously mentioned—such as strong technical expertise, a robust set of skills, effective network performance— and the functions assigned to the NCPs in both the MNE Guidelines and the OECD Recommendation on the Role of Government in Promoting Responsible Business Conduct, the mechanism's potential to transform and enhance the current RBC landscape remains unrealized, with limited examples where NCPs have demonstrated their ability to make a significant impact.

Final remarks

The NCP system functions as a global network of specialized authorities dedicated to promoting and overseeing business activities to ensure compliance with the MNE Guidelines and other OECD's RBC standards and instruments. Despite facing various challenges, the NCPs have made modest yet meaningful progress in fulfilling these responsibilities. However, significant gaps remain between their actual performance and the system's needs and expectations, where their inherent strengths are often intertwined with their weaknesses. In particular, shortcomings in meeting standards for functional equivalence and effectiveness in handling specific instances undermine the credibility of the NCPs and hinder the ability of affected parties to seek remedy through this mechanism. This not only impacts the collective strength of the NCP system but also the overall effectiveness of remedy mechanisms and the capacity to hold companies accountable for human rights violations resulting from their operations

² See OECD's database of specific instances: <https://mneguidelines.oecd.org/database/>

DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS: ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

Sebastián Smart
Universidad Anglia Ruskin

Introducción y contexto

A pesar de los avances en el desarrollo de estándares normativos vinculantes en materia de derechos humanos y empresas, estos aún no se han desarrollado en el contexto latinoamericano. Sin embargo, existen diversas vías para hacer que los Principios Rectores en materia de derechos humanos y empresas tengan un efecto vinculante. Entre ellas se encuentran la posibilidad de crear un tratado vinculante, la generación de estándares obligatorios a nivel regional, como la directiva europea, y legislaciones a nivel nacional que empiezan a imponer obligaciones en materia de derechos humanos para empresas. Además, la litigación estratégica por parte de las víctimas también juega un papel crucial en este proceso.

La litigación estratégica en derechos humanos, más allá de los resultados jurídicos concretos en casos específicos, ha sido un instrumento útil para el avance del marco normativo sobre empresas y derechos humanos. Este tipo de litigación puede analizarse desde diversas perspectivas, como la estrategia de las víctimas, los elementos político-económicos y estructurales que permiten o limitan la litigación, entre otros.

En este blog, me enfocaré en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y su desarrollo jurisprudencial en materia de derechos humanos y empresas. Analizaré el reconocimiento histórico de la Corte sobre la responsabilidad de actores no estatales en violaciones de derechos humanos, revisando los pasos iniciales en esta materia y examinando los casos que han incorporado estándares asociados a los [Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos](#) de las Naciones Unidas (PRNU).

Jurisprudencia y evolución del tema

Desde su primera decisión, la Corte IDH ha considerado la potencial responsabilidad de actores no estatales. En el caso [Velásquez Rodríguez vs. Honduras](#), la Corte subrayó el deber del Estado de garantizar los derechos frente a actuaciones de terceros y la obligación de reparación correspondiente. La Corte destacó que los Estados deben organizar sus estructuras de poder público de manera que aseguren el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, previniendo, investigando y sancionando las violaciones, y reparando los daños cuando sea posible (párrafo 166).

La primera referencia explícita de la Corte IDH a estándares en materia de derechos humanos y empresas, y en particular a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (PRNU), se da en el caso [Kalina Lokono vs. Surinam](#). En este caso, la Corte estableció que las empresas no solo tienen la obligación de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos, lo que implica obligaciones de prevención, mitigación y responsabilidades por sus actividades (párrafos 224-25).

Un análisis similar se encuentra en el caso [Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil](#). La Corte reiteró que el Estado no puede ser considerado responsable por cualquier violación a los derechos humanos cometida por particulares dentro de su jurisdicción, y que es necesario analizar las circunstancias particulares del caso para establecer responsabilidades (párrafo 148). La Corte reconoció la obligación del Estado de supervisar una fábrica que desarrollaba elementos altamente peligrosos, apoyándose en los PRNU, destacando que los Estados deben hacer cumplir las leyes y supervisar adecuadamente las actividades empresariales peligrosas para prevenir violaciones a los derechos humanos (párrafo 149).

El caso de los [Buzos Miskitos vs. Honduras](#) marca un hito en la jurisprudencia de la Corte IDH al desarrollar de manera más detallada los PRNU. En este caso, la Corte afirmó que no le corresponde determinar la responsabilidad individual de los particulares, sino establecer si los Estados son responsables por la violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención (párrafo 46). La Corte detalló los tres pilares de los PRNU y subrayó que los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas, adoptando medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar dichas violaciones (párrafos 47-51).

El caso [Vera Rojas vs. Chile](#) sigue un argumento similar al de Buzos Miskitos, sin embargo, destaca por generar una responsabilidad reforzada para el Estado en la supervisión de recintos de salud, reconociendo que la salud es un bien público que obliga al Estado a una garantía reforzada de supervisión (párrafo 89). La Corte reiteró que los Estados deben regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada por particulares, y que las empresas privadas deben adoptar medidas para evitar impactos negativos en los derechos humanos (párrafo 145).

Los últimos dos casos de análisis se refieren a las obligaciones del Estado peruano. Primero, el caso [Olivera Fuentes vs. Perú](#) aborda en detalle las obligaciones del Estado y responsabilidades de las empresas respecto de la población LGBTIQ+, mencionando la cadena de suministro tanto hacia arriba como hacia abajo, y destacando la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de estas personas en sus operaciones y relaciones comerciales (párrafo 103). Por su parte, en el caso [La Oroya vs. Perú](#), la Corte obligó al Estado a garantizar que los PRNU se introduzcan en las operaciones mineras y metalúrgicas, asegurando que los titulares mineros se responsabilicen de las consecuencias y resarcimiento de daños ambientales (párrafo 352).

Opiniones Individuales de los Jueces

La Corte IDH ha reconocido que las empresas tienen una responsabilidad primaria en materia de derechos humanos y ha incorporado los PRNU en su jurisprudencia. Sin embargo, la Corte tiende a adoptar una visión centrada en el Estado en sus sentencias, lo cual se ve influenciado por factores estructurales, presiones políticas de los Estados y el propio mandato de la Corte.

El debate interno en la Corte, reflejado en los votos razonados de sus jueces, muestra diferentes enfoques sobre cómo abordar las responsabilidades de las empresas. Mientras algunos jueces como Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot han defendido una visión estado-céntrica, otros como Patricio Pazmiño Freire han presionado por una aplicación más directa de las responsabilidades de las empresas.

El juez [Ferrer Mac-Gregor Poisot](#), en su voto razonado en el caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus, subrayó la obligación del Estado de proteger los derechos humanos frente a actividades empresariales peligrosas, basándose en los PRNU para reforzar estas obligaciones. Ferrer Mac-Gregor se

enfocó principalmente en la responsabilidad del Estado, dejando en segundo plano la responsabilidad directa de las empresas.

Por otro lado, el juez Pazmiño Freire, en su [voto concurrente en el caso de los Buzos Miskitos](#), cuestionó si las reglas tradicionales de responsabilidad internacional, centradas exclusivamente en el Estado, deben mantenerse inamovibles. Pazmiño Freire sugirió que las empresas transnacionales, que hoy ostentan tanto o más poder que muchos Estados, también deberían ser reconocidas como responsables por las violaciones a los derechos humanos, no solo a través de la relación Estado-empresa, sino como actores directos en el derecho internacional.

Conclusión

La Corte IDH ha reconocido que las empresas tienen una responsabilidad clave en materia de derechos humanos y ha integrado los PRNU en sus fallos. Sin embargo, la Corte suele adoptar una perspectiva centrada en el Estado en sus resoluciones, lo que se ve influido por factores estructurales, presiones políticas de los Estados y su propio mandato institucional.

El debate dentro de la Corte, evidenciado en las opiniones de los jueces, refleja distintas posturas sobre cómo abordar las responsabilidades empresariales. Mientras algunos jueces, como Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, han sostenido una visión que prioriza al Estado, otros, como Patricio Pazmiño Freire, han impulsado una interpretación más directa de las obligaciones de las empresas.

La evolución de la jurisprudencia en el Sistema Interamericano refleja un proceso continuo de adaptación y refinamiento en la interpretación de los PRNU, y seguirá siendo un tema de vital importancia para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.

Este análisis ha sido una ventana a cómo la Corte IDH ha avanzado en la incorporación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, y cómo estos principios se están aplicando en casos específicos dentro de su jurisdicción. La discusión sigue abierta y es crucial para el futuro de la responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos en nuestra región.